



**A**l presidente del Gobierno le tocó ayer vivir lo que debe de ser la peor pesadilla de un político. Verse obligado a comparecer en el Parlamento para, desdiciéndose de argumentos y compromisos que habían venido siendo la médula de su discurso, dedicarse a disparar en unos pocos minutos contra millones de potenciales votantes: primero, los funcionarios; después, los pensionistas; más tarde, las parejas jóvenes con embarazo a la vista.

Viéndolo con perspectiva, podemos pensar que se veía venir, que debió prepararse con tiempo y preparar a la sociedad para asumirlo, que paga un precio suplementario por no haber afrontado desde el principio una realidad más grave de lo que, tozudamente, se mostró dispuesto a

**Análisis**

**Francisco Longo**

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE GOBERNANZA, ESADE IURL



**Un ajuste anunciado e inevitable**

**La sociedad paga un precio suplementario al no reconocerse antes la realidad**

reconocer. Tal vez, pero lo cierto es que ayer, a las 9 de la mañana, la cosa resultaba inevitable: había que materializar el compromiso de reducir el déficit en un 1,5% del PIB, adicional a los recortes ya previstos y anunciados. Era la contribución comprometida por España al plan de salva-

mento de la eurozona fraguado el pasado fin de semana. La cuestión era solo seleccionar las medidas concretas para hacerlo efectivo.

¿Ha acertado en esta elección entre la peste y el cólera? Podemos discutirlo, pero habría que hacerlo con cifras en la mano y sin demagogia. Pese a lo que aduzca el líder de la oposición, la cosa no se solventaba eliminando o fusionando unos cuantos ministerios. Eran necesarias medidas de precio político alto. De ellas, la más ruidosa ha sido la reducción salarial a los empleados del sector público. Es un ejemplo de cómo se han llevado en el Gobierno las cosas de la crisis. Tras un anuncio de congelación del secretario de Estado de Hacienda, seguido de un enfático desmentido de la vicepresidenta primera, el recorte de sueldos pú-

blicos se confirma hoy en su versión más dura. No parece descabellado si pensamos que los costes salariales del sector público, de acuerdo con un estudio de **González Fuentes** de 2009, están un 20% por encima de los del sector privado, y habían crecido entre 2000 y 2008 más del doble que la media de la UE-27. Una incógnita, peligrosa en mi opinión, gravita, al escribir estas líneas, sobre la medida. Habló el presidente de reducción «media» del 5%. Si, como hace temer la expresión, el recorte no fuera proporcional, sino inverso al nivel de renta de los afectados, se reforzaría un desequilibrio importante en la estructura de sueldos públicos, donde son las escalas inferiores -el trabajo de menor cualificación- las que perciben salarios más alejados, por arriba, del mercado.